

*Políticas educativas en el Cono Sur: dimensiones críticas del cambio*, de Enrique Martínez Larrechea y Adriana Chiancone (compiladores). Montevideo: Grupo Magro Editores, 2010. págs.

El estudio de las políticas educativas constituye un subcampo en claro proceso de emergencia en el heterogéneo ámbito de las Ciencias de la Educación. Con aportes de larga data en otras zonas, en Uruguay la producción de trabajos en esta área comenzó a mediados de los noventa y ha cobrado un perfil de mayor realce muy recientemente, en el último lustro. Hoy el término “políticas educativas” parece estar en boga y el libro compilado por Enrique Martínez Larrechea y Adriana Chiancone se inscribe justamente en esta tendencia.

Se trata de una obra colectiva que reúne trabajos de una serie de autores con destacada trayectoria en la educación latinoamericana, varios de los cuales han conjugado la vida académica con la gestión de políticas y programas educativos, con la riqueza de perspectivas que dicha conjugación implica. A través de siete artículos y una presentación, el libro aborda cinco temas que, como se anuncia en el subtítulo, constituyen dimensiones ciertamente críticas del cambio educativo en América Latina: la cuestión docente, la integración social, la evaluación de la calidad educativa, los vínculos entre educación y la cultura digital, y la relación entre la calidad de la política y la generación de políticas educativas.

En el tratamiento de estas dimensiones se hace referencia a una variedad de políticas educativas: políticas de formación docente, políticas de profesionalización docente centradas en las condiciones laborales de maestros y profesores, políticas curriculares, políticas institucionales en general y referidas al gobierno de la educación en particular, políticas de evaluación de la calidad educativa, políticas de equidad educativa.

En algunos artículos tales referencias se sustentan en un bagaje teórico muy rico, como en el texto de Rafael Bayce sobre educación inclusiva que cuestiona fuertemente esta corriente sobre la base de un amplio abanico de teóricos sociales, o en el de Cristián Cox que mira la actual agenda educativa chilena con categorías provenientes del análisis clásico de las políticas públicas. En otros artículos cobra particular relevancia la sistematización de la

evidencia empírica disponible sobre la realidad educativa de la región. Así, Gustavo Cosse estudia la complejidad de la evaluación internacional de la calidad educativa a partir de los datos de PISA y TIMMS, en sus diversas ediciones. A su vez, en su abordaje sobre los vínculos entre educación y cohesión social, Francisco Piñón parte de las estadísticas procesadas y difundidas por SITEAL (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina).

Tomado en su conjunto, el libro constituye un aporte a la comprensión de las políticas educativas en tanto políticas públicas al considerar —aunque no de forma sistemática— tres dimensiones claves: el contenido de las políticas, su proceso y su institucionalidad.

En la primera dimensión, los artículos no avanzan en la definición de posibles líneas de política pero sí precisan cuáles son algunos de los principales problemas que las políticas debieran enfrentar en nuestros países: la transformación de las prácticas docentes (Cox), la incorporación por parte de la escuela de un modelo de comunicación cercano a la cultura digital (Fainholc), la fragmentación social (Piñón). Por su parte, sin llegar a enunciar políticas específicas, Denise Vaillant adelanta cuatro factores que deben ser considerados a la hora de reformular las políticas docentes: la creación de entornos profesionales facilitadores, la implantación de formación de calidad, la evaluación que retroalimente la tarea y la valoración social. En igual plano se posiciona Cosse cuando recomienda fortalecer las instancias nacionales de evaluación de la calidad educativa porque ellas facilitan la incorporación de los rasgos de funcionamiento del sistema educativo y del contexto social como factores explicativos de los resultados educativos.

En cuanto al proceso de las políticas educativas, Javier Hermo y Cecilia Pittelli examinan cómo operó el déficit de participación de la sociedad civil en general y de los docentes en particular en la reforma argentina de los noventa: “El Estado se mostró ineficiente y débil para liderar un proceso de reforma que necesitaba de grandes consensos y metas de cara al futuro y que enriquecieran el debate del tan promocionado Congreso Pedagógico” (88).

En esta dimensión procesual resulta particularmente esclarecedor el artículo “Educación en el Bicentenario: dos agendas y calidad de la política” de

Cristián Cox, quien profundiza en la incidencia de las condiciones políticas sobre la generación y la implementación de las políticas educativas, con especial referencia a la situación de Chile a partir de la Administración Bachelet. Sin tapujos, frente a un tema que suele desatar resistencias en algunos actores educativos, el autor señala que “las dos agendas que enfrenta el país en educación al aproximarse el Bicentenario demandan una alta capacidad de respuesta del sistema político. Esta dimensión poco examinada de la ‘política educacional’ es, sin embargo, clave. Al final, la calidad de las nuevas regulaciones y programas que se concuerden, como la coherencia del conjunto, dependerá decisivamente de ‘la política’, es decir de las relaciones entre Gobierno y Oposición, de los partidos, y la calidad del proceso de generación de leyes” (201).

Respecto a la tercera dimensión, la institucional, Cosse presenta una excelente sistematización de los hallazgos de la investigación reciente respecto a la opaca relación entre descentralización y calidad de la educación, al tiempo que Cox resume la agenda institucional que quedó planteada en Chile a partir del año 2006 cuando el movimiento estudiantil y la reunión del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación actuaron como factores catalizadores del largamente postergado debate sobre los aspectos institucionales y regulatorios del sistema educativo.

En suma, el libro compilado por Enrique Martínez Larrechea y Adriana Chiancone aporta a la creciente acumulación en el campo de las políticas educacionales, además de servir de insumo a quienes trabajan en algunas de las temáticas específicas tales como inclusión, evaluación educativa, entre otras. Adicionalmente, puede marcarse como virtud del texto la confianza que varios de los artículos transmiten en cuanto a las posibilidades de transformación de la educación latinoamericana en el siglo XXI, confianza ligada al reconocimiento de la escuela como un producto histórico, resultante de la interacción entre actores sociales y políticos, ideologías, visiones pedagógicas.

Sin perjuicio de lo reseñado, cabe señalar que, con las reformas educativas de los noventa como telón de fondo de la reflexión de la mayor parte de los autores, el libro podría haber precisado con claridad el alcance

dado a la noción de “política educativa” de forma de evitar el riesgo de “estiramiento conceptual” —usando la conocida expresión de Giovanni Sartori—, de pérdida de especificidad del concepto. Ello sucede en capítulos como el de inclusión educativa —focalizado en dicho paradigma sin mayores referencias a las políticas educacionales— o el referido a la cohesión social —centrado en los desafíos educativos para la cohesión, no en las políticas que podrían conducir a dicho objetivo.

También podría haber avanzado en una lectura transversal de las políticas presentadas y/o profundizado en la justificación de por qué la cuestión docente, la fragmentación social, la cultura digital, la medición de la calidad educativa y la relación entre el sistema político y el educativo pueden ser calificados como puntos críticos en los procesos de cambio de la educación latinoamericana.

*María Ester Mancebo*  
Universidad de la República